



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., ocho (8) de abril de dos mil diecinueve (2019)

RADICACIÓN:	11001-33-35-026-2017-00208-00
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LESIVIDAD
ACTOR:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
OPOSITOR:	JOSÉ AUSBERTO OSPINA LÓPEZ.

Se decide sobre el recurso de reposición interpuesto por la abogada Mayra Alejandra Aguilar Sarmiento, quien funge como apoderada de la parte actora, visible del folio 253- 258 del cuaderno de medida cautelar, contra la decisión del 11 de febrero de 2019 (fls.247-252), que dispuso negar la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos acusados.

Como fundamento del recurso indica, que lo que se pretende con la suspensión provisional es la mera protección del patrimonio que se puede vulnerar, para ayudar a mantener la seguridad jurídica, habida consideración que, su finalidad es la de evitar perjuicios eventuales a los presuntos titulares de un derecho, procurando así el menor daño tanto para el erario público como para las partes.

De la misma manera señala, que lo que se busca con la suspensión provisional de los actos acusados es, frenar el cumplimiento de los mismos sin que ello implique prejudicialidad al respecto.

Frente al caso concreto manifiesta la entidad que el señor Ospina López al 1º de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993), el hoy pensionado no tenía 15 años de servicio ni 40 años de edad como lo exige el artículo 36 ibídem para ser beneficiario del régimen de transición, por lo que no era posible aplicar el régimen especial del INPEC de la ley 32 de 1986, sino que debía acreditar los requisitos pensionales dispuestos en el Decreto 2090 de 2003, en razón a que el requisito de 20 años de servicio en cargos de excepción lo completó con posterioridad al 28 de julio de 2003 - fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003-.

De acuerdo con lo anterior, la Profesional del Derecho arguye, que al tenor de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, el demandado debió efectuar aportes para pensión cuando menos 500 semanas de cotización especial, además de cumplir con el número mínimo de semanas exigido por la ley 797 de 2003, para acceder a la pensión en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo y por los menos uno de los dos requisitos exigidos en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, para gozar del régimen de transición, requisitos que no cumplía al momento de la entrada en vigencia de la mencionada ley.

Concluye que el señor Ospina López no es beneficiario del régimen especial contenido en la Ley 32 de 1986 y en tal sentido las resoluciones No. 54885 del 23 de noviembre de 2017 y RDP 035591 del 5 de agosto de 2013, proferidas por la UGPP, mediante las cuales reconoció y reliquidó una pensión de vejez a favor del demandado, son contrarias a lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico.

CONSIDERACIONES

i. De la procedencia del recurso de reposición

El artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé:

“Artículo 242. Reposición. Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica. En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.”

De conformidad con el artículo transcrito, se tiene que la decisión adoptada y que hoy cuestiona la parte demandante es susceptible del recurso de reposición y se precisa que el mismo fue presentado dentro del término legal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 del Código General del Proceso.

ii. Decisión del Despacho

En providencia anterior el Juzgado se ocupó de valorar el contenido normativo de las disposiciones jurídicas que involucran la solicitud de la suspensión provisional contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; de la misma manera, realizó un estudio para determinar si existía o no violación de las disposiciones invocadas por la parte demandante.

Debe señalar el Despacho, que el recurso interpuesto por la actora nuevamente hace alusión a normatividad esbozada con la solicitud de la medida provisional, los cuales ya fueron objeto de estudio en la providencia recurrida.

Además, en dicha providencia se estudió la procedencia de la medida cautelar invocada, de conformidad con lo señalado en el artículo 231 del CPACA, y se realizó una confrontación de los actos demandados y las normas superiores señaladas como vulneradas concluyéndose así, que al no demostrarse una violación de las disposiciones invocadas como violadas, acceder a la suspensión provisional de los actos acusados, daría lugar a la afectación del mínimo vital del señor Ospina López.

Al respecto, el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, señala:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, **cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.** Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos”

Negrilla y subraya fuera de texto

Del contenido de la norma *up supra* se establece, que no podría el Suscrito decretar la medida cautelar sin un análisis riguroso de las pruebas aportadas, hecho que surge del estudio del fondo del asunto como en efecto se plasmó en el auto objeto del presente recurso.

Ahora cabe señalar que, el objetivo de la medida solicitada por la entidad accionante lleva consigo la suspensión de los pagos que se vienen efectuando al demandado en virtud de la pensión de vejez que viene devengando desde el año 2007, hecho mismo que sólo se evidencia con el estudio de las pruebas obrantes en el proceso, por las cuales se acreditan los supuestos facticos alegados por ambas partes. Es por ello, que éste Despacho Judicial no accedió a tal solicitud, habida consideración, y como se dijo en líneas anteriores, no se acreditó la violación de las disposiciones invocadas como violadas tal y como lo preceptúa el artículo 231 del CPACA, y el acceder a la suspensión provisional de los actos acusados, daría lugar a la afectación del mínimo vital del señor Ospina López.

Además, no puede perderse vista, que una de las principales cualidades que trajo la Ley 1437 de 2011, en materia de medidas cautelares, es precisamente que el **Juez debe analizar la sustentación de la medida y estudiar las**

pruebas, porque no basta con una infracción ostensible o directa, como así lo consagraba el Decreto 01 de 1984.¹

Es por lo anterior, que no es posible para el Despacho, de conformidad con las pruebas aportadas al plenario, acceder a la medida cautelar, pues ello implicaría la suspensión de los efectos de los actos administrativos y la vulneración directa del derecho al mínimo vital del señor José Ausberto Ospina López. Razón por la cual, y con fundamento en lo anteriormente expuesto, considera éste Estrado Judicial que no hay lugar a decretar la medida cautelar solicitada y por lo tanto se mantendrá la decisión tomada mediante providencia de data 11 de febrero de 2019, por la cual se dispuso negar la solicitud de suspensión provisional de los actos acusados.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO VEINTISEÍS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SECCIÓN SEGUNDA**,

RESUELVE

PRIMERO. NO REPONER la providencia proferida el 11 de febrero de 2019, por medio de la cual se negó la solicitud de suspensión provisional de los actos acusados, presentada por la apoderada judicial de la entidad demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. Por secretaría, **ÚNASE** el presente cuaderno, con el expediente principal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

FE

 JUZGADO VEINTISEÍS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA Por anotación en ESTADO ELECTRÓNICO notifico a las partes la providencia anterior hoy 9 DE ABRIL DE 2019 , a las ocho de la mañana (8:00 .m.) LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA

¹ "ARTÍCULO 152. Modificado por el art. 31, Decreto Nacional 2304 de 1989 El Consejo de Estado y los tribunales administrativos podrán suspender los actos administrativos mediante los siguientes requisitos: 1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida. 2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud. 3. Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor".